

## RESEÑAS DE LIBROS

Carol Wise, *Reinventando el Estado: estrategia económica y cambio institucional en el Perú*. Lima: Universidad del Pacífico, 2003, 358pp.

Pese a la magnitud e importancia de los cambios institucionales que se produjeron en el Perú durante la década de 1990, muy pocos son hasta el momento los trabajos que han tratado de analizar seria y objetivamente el "Fenómeno Fujimori". El libro de Carol Wise, con todos sus alcances y limitaciones, representa un intento interesante para entender cómo y por qué se produjeron dichas reformas y cuáles fueron los problemas que quedaron sin resolver. Desde esta perspectiva, podemos considerarlo un buen complemento al libro sobre *La reforma incompleta*, editado por Abusada, Du Bois, Morón y Valderrama, así como algunos de los trabajos contenidos en el *Perú de Fujimori*, editado por Crabtree y Thomas.

Lo primero que llama la atención al leer este trabajo es que, a pesar de que el análisis de las reformas del gobierno de Fujimori representa solo la tercera y última parte del libro, es aquí donde la autora concentra la mayor parte de su esfuerzo para comprender los cambios ocurridos en el país y no es, por lo tanto, casualidad que este capítulo porte el mismo título del libro. El análisis de los períodos anteriores queda oscurecido por el horizonte relativamente corto de tiempo que considera la autora. En efecto, el hecho de tomar como punto de partida el primer gobierno de Belaunde (1963-1968), no nos permite saber cuán bueno o malo era el aparato estatal antes de 1963 y en qué medida este se vio mejorado o empeorado por los gobiernos populistas de Belaunde y Velasco.

Creemos que en lugar de dedicar todo un capítulo (el primero) a revisar la experiencia latinoamericana, que poco ayuda a entender lo ocurrido en el Perú, la autora debió haber estudiado los antecedentes sobre el papel del Estado en nuestro país. Esto se debe a que, hasta fines de la década de 1950, el modelo económico aplicado en nuestro país era totalmente distinto al que tenían Argentina, Brasil y Chile, países que ya desde los tiempos de la Gran Depresión venían siguiendo un modelo de sustitución de importaciones, y tenían

una visión también muy distinta del papel que le tocaba desempeñar al Estado. El Perú, en cambio, seguía un modelo económico liberal con un pujante sector de exportaciones mineras y agrícolas, y un Estado que fomentaba y complementaba la inversión privada. Este pequeño y eficiente aparato estatal se vio apabullado durante 1960 y 1970, por el ritmo de crecimiento vertiginoso que le imprimieron primero Belaunde y después Velasco, atribuyéndole responsabilidades sobre las cuales no tenía ninguna experiencia y que nunca llegó a adquirir realmente, porque ninguno de estos dos gobiernos desarrolló una reforma institucional ni una carrera pública compatibles con las nuevas atribuciones.

La autora plantea una hipótesis central en su trabajo, que consiste en la conjetura de que una reforma de mercado exitosa y sostenible debe cumplir cuatro requisitos: (i) autonomía burocrática, (ii) reforzamiento de las instituciones y de la planificación del Estado, (iii) coalición de liderazgo y (iv) intermediación de intereses. El no cumplimiento de estos requisitos habría sido, desde la perspectiva planteada por la autora, la causa fundamental del fracaso de todos los modelos de política económica y de funcionamiento del Estado que se experimentaron antes de Fujimori.

En el sexto capítulo, luego de analizar las principales reformas institucionales que desarrolló Fujimori en su primer gobierno, la autora señala, muy acertadamente que:

"A sabiendas o no, Fujimori y su pequeño grupo de asesores han reinventado el Estado peruano en formas que lo vuelven más capaz de orientar su economía hacia una vía de mayor crecimiento y mayor productividad, independientemente de quién ocupe el Ejecutivo" (p. 283).

Dichas reformas estuvieron constituidas por la racionalización del aparato estatal, el reforzamiento de la autonomía de instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la creación de nuevas instituciones autónomas vinculadas a la regulación (Indecopi, Osiptel), la privatización (Copri) y los programas sociales (Foncodes y el Infes). Quizás habría sido deseable un análisis más profundo sobre estas reformas y sus implicancias.

En la medida que estas reformas solo cumplieron con el primero de los cuatro requisitos planteados más arriba y que el gobierno de Fujimori vio debilitado su apoyo político y social, nos queda claro por qué ocurrieron las posteriores crisis, agonía y caída que todos conocemos. Esto también nos permite entender los retos que enfrenta el actual gobierno de Toledo para sacar el país adelante.

El análisis desarrollado por la autora es, a nuestro entender, esencialmente correcto, con la sola excepción de un tema muy específico, que se refiere a su convicción de que un país progresa solo en la medida que el gobierno es capaz de diseñar e implementar el modelo económico correcto. Esta visión proestatista o voluntarista del funcionamiento de la economía es notoria en varias partes de su trabajo, especialmente en el séptimo capítulo, donde ella señala que:

" ... estas deficiencias ... son síntoma de un problema mayor, que consiste en no haber articulado una estrategia integrada de desarrollo, liderada por el comercio y orientada hacia la promoción de las exportaciones de mayor valor agregado..."(p. 285).

Esta ausencia de una visión planificadora, por parte de los funcionarios del gobierno de Fujimori, sería la explicación de por qué la experiencia chilena fue tremendamente exitosa, mientras que la experiencia peruana quedó truncada a medio camino.

Este enfoque refleja una creencia enraizada en la mente de muchos intelectuales con respecto a que los hechos sociales pueden ser manipulados por los seres humanos para obtener resultados programados de antemano, siempre y cuando sean llevados a cabo por las personas mejor capacitadas. Así, por ejemplo, podemos desterrar la pobreza, desarrollar la industria, mejorar los niveles educativos y de acceso a la salud pública, con un Estado planificado manejado por personas competentes y virtuosas. Este es el tipo de gobierno que preconizaba el pintoresco pensador francés Henri de Saint Simon, a fines del siglo XVIII<sup>1</sup>, quien como buen filósofo cartesiano creía que Francia debía ser gobernada por un Consejo de Sabios, y es exactamente la idea que predomina con especial fuerza en los intelectuales socialistas y, en menor grado, en los economistas de orientación keynesiana.

Esta visión del Estado se contrapone con la visión liberal y, en especial, con la de los economistas austriacos como Hayek<sup>2</sup> y Mises<sup>3</sup>, quienes son enfáticos en señalar la imposibilidad de que los funcionarios estatales tengan mejor información que los empresarios estatales respecto de lo que les conviene y hacia dónde debe orientarse su inversión. De hecho, ningún economista chileno pudo haber concebido una estrategia de desarrollo tal

- 
1. Henri de Saint Simon (1760 – 1825). Hayek desarrolló un excelente estudio sobre su vida y obra, en "The 'Accoucheur d'Idées': Henri de Saint Simon", en Hayek, Friedrich (1979). *The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason*. Indianápolis: Liberty Fund.
  2. Hayek, Friedrich (1973). "Cosmos and Taxis", en *Law Legislation and Liberty: Rules and Order*, vol. I. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 235–53. También es interesante el análisis que desarrolla en su ensayo sobre "Dr. Bernard Mandeville," publicado en *The Trend of Economic Thinking. Essays on Political Economists and Economic History*. Series: (CWFH) The Collected Works of F. A. Hayek. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
  3. Von Mises, Ludwig (1949). *Human Action: A Treatise on Economics*. New Haven y Londres: Yale University Press.

como la imagina Carol Wise. La labor del estado chileno, como la de cualquier Estado en una economía de mercado exitosa, consiste en contribuir con el sector privado proporcionándole un ambiente favorable para producir e invertir, con un marco legal e instituciones que protejan la inversión privada y los contratos, así como la inversión en infraestructura básica.

Finalmente, debemos lamentar que la autora se refiera a la violencia terrorista como una guerra civil proveniente de las comunidades andinas. Creemos que hoy ningún peruano que haya sufrido, directa o indirectamente, las consecuencias del terrorismo comparta la idea de que Sendero Luminoso y el MRTA hayan liderado una guerra civil. Del mismo modo, nos parecería extraño que los norteamericanos consideren a las milicias de ultraderecha como los líderes de una nueva Guerra de Secesión.

Jorge Fernández Baca